

Paraguay

Jorge Lara Castro

Jorge Lara Castro: Sociólogo paraguayo; catedrático de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica, Asunción.

La crisis de abril

El lunes 22 de abril de 1996, los medios de comunicación comenzaron a difundir el rumor de que el general de división Lino César Oviedo había sido relevado del cargo de comandante del Ejército por el presidente del Paraguay y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, ingeniero Juan Carlos Wasmosy. En el saber ciudadano, la gente identifica al comandante del Ejército con el poder real. Según la legítima suposición colectiva, el militar que públicamente no respeta la Constitución y desafía la autoridad del Presidente, es quien representa el poder real. Es algo que la propia imaginación democrática no puede ocultar. La conclusión es obvia: el grado de autoridad del presidente Wasmosy está limitado por el poder del general Oviedo.

Durante las primeras horas de la tarde, el fantasma del golpe de Estado recorre la conciencia de los demócratas. La información no confirmada oficialmente desata en la ciudadanía todo tipo de especulación sobre el futuro inmediato de la transición democrática. ¿Por qué el temor ciudadano ante la posibilidad de pase a retiro de Oviedo? Porque el general Oviedo es el comandante del Ejército, lidera una cúpula militar. Pertenece al arma de Caballería, la unidad militar de más poder dentro del arma, representa el pensamiento de un Ejército educado en la ideología dictatorial y es el hombre más influyente en las decisiones claves del Poder Ejecutivo. Además, es un miembro del Partido Colorado (PC). Por su posición dentro del Ejército se encuentra acumulando poder (político y económico), para suceder a Wasmosy como candidato presidencial por el PC en las elecciones de 1998. Hay quienes quisieran ver en las diferencias entre Wasmosy y Oviedo una contradicción entre el proyecto democrático y los resabios de la herencia dictatorial. En realidad las confrontaciones en las alturas del poder no son otra cosa que las manifestaciones inherentes a la misma constitución del poder civil como representación del poder militar. La reproducción de la alianza es la que produce todo tipo de contradicciones entre Wasmosy y Oviedo.

El 22 de abril la crisis política estalla y se manifiesta como la negativa de Oviedo a aceptar la orden de relevo como comandante del Ejército. El poder militar emerge como desafiando al poder civil, que justifica la legitimidad de sus decisiones por

los atributos que le otorga la Constitución Nacional al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En su forma, se trata de un quiebre de las instituciones democráticas. En su contenido, de un conflicto en el seno del bloque de poder dual entre la fracción empresarial del wasmosismo y la fracción militar-empresarial del oviedismo en torno a la cuota de rentabilidad y de poder sobre el Estado. Como al parecer no es posible resolver dicho conflicto en el marco de la privacidad palaciega, estalla de tal manera que pone en cuestionamiento la histórica alianza entre gobierno y las Fuerzas Armadas. El conflicto hace evidente el límite de esa alianza. Quizás sin proponérselo, Wasmosy pone en crisis el modelo político de la transición, que bajo la forma de democracia representativa permitió a la élite militar convertir al primer presidente civil en el representante constitucional del poder de las FFAA.

La metamorfosis democrática del poder dual

Históricamente, la relación entre la clase política del PC y la jerarquía militar se materializó en una organización estatal en donde la forma dictatorial fue la expresión política de las relaciones entre el PC y las FFAA. Esta relación, bajo el predominio de la clase militar hizo posible que la dictadura del general Stroessner tuviera el apoyo de un poderoso partido político. Así, el poder real era ejercido por la rama militar mientras la burocracia del Partido, subordinado al mando del dictador, fortalecía la base de apoyo político a través del prebendarismo y la ideología de la "paz sin comunismo".

En el modelo de la estructura dictatorial, la unidad de las FFAA y el PC permitió la reproducción del poder y la centralización del mando en la figura de Stroessner, hasta que el entorno del dictador pretendió desplazar del poder militar a Andrés Rodríguez. La crisis de la dictadura se materializó con el golpe militar de febrero de 1989. En la noche del día 2, la fracción militar liderada por el general Rodríguez derrocó al dictador Alfredo Stroessner, después de más de treinta años de opresión sobre el Paraguay. Ese golpe militar, que integraba también el entonces coronel de caballería Oviedo, fue oportuno para salvar la estructura de la dominación dictatorial y detener la crisis política, dada la creciente incapacidad del dictador de mantener la unidad del bloque dominante y la alianza entre las FFAA y el PC.

El mérito del general Rodríguez entonces consistió en entender la necesidad de recomponer la unidad de las fracciones económico-políticas del bloque histórico y de redefinir la alianza estratégica entre la clase militar y la burocracia del PC, para reorganizar las relaciones entre el Estado y la sociedad sobre la legitimidad de la democracia representativa.

El golpe de Estado había legitimado a los militares. Ahora la comunidad internacional exigía una salida electoral. El recambio político a través de procesos electorales -más o menos competitivos- surgió como imperativo histórico para resolver la crisis política. No obstante, el proceso electoral implicaba un alto riesgo para la clase militar que había sustentado la dictadura y para la burocracia política del Partido que había administrado con eficiencia el saqueo a la nación, de acuerdo a la consigna del dictador: "No habrá un colorado pobre". De alguna manera el voto en el marco de elecciones libres era poder político, y al PC precisamente no le entusiasmaba la democracia más que a la cúpula militar.

En el pensamiento estratégico militar surgieron inmediatamente varias interrogantes en torno a cómo definir la estrategia política. ¿Qué tipo de democracia habría de concebirse entonces para garantizar la seguridad de la clase dominante y su representación político-militar? ¿Cómo garantizar el recambio político sin arriesgar la estructura de dominación organizada por la dictadura stronista? ¿Cómo hacer creíble un proceso electoral controlando las reglas de juego de la competencia electoral? La respuesta se materializó en las elecciones de mayo de 1993. En el marco de un juego limitado entre partidos políticos, el Partido Colorado obtuvo la mayoría electoral. En un contexto de libertades electorales, fraude electoral (padrones abultados, control oficialista del Tribunal Electoral, uso masivo de recursos del Estado, etc.) fue el mecanismo regulador de la "competencia" entre el Partido del Estado y los partidos históricos de la oposición. El proceso electoral fue importante para transformar al general de división de Caballería Andrés Rodríguez en Presidente legítimo del Paraguay.

A los resultados cuantitativos, sumó la oposición el reconocimiento. Los representantes de los dos principales partidos de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) aceptaron los resultados electorales con cierta reserva. Calificaron las elecciones como "libres y pluralistas pero no limpias, irregulares pero necesarias como un paso a la democratización del país". Durante cinco años el liderazgo del Presidente Andrés Rodríguez fue eficaz para recomponer la alianza de las FFAA-PC bajo la forma de democracia representativa. Prueba de ello fue el meteórico ascenso del coronel Oviedo al grado de general de división y las reformas jurídico-políticas que preservaban el poder del PC y la unidad del bloque dominante. La iniciativa gubernamental de dos importantes reformas del Código Electoral y de la Constitución Nacional fue percibida como un avance en la transición hacia la democracia. Es cierto que se reconocieron nuevos derechos a los ciudadanos, pero la historia real también revela que las reformas legitimaron los beneficios obtenidos por la burocracia cívico-militar durante el régimen dictatorial.

Eso explica que durante el ejercicio del presidente Rodríguez, bajo formas democráticas, el gobierno administrara otro proceso de transición del poder. La relación FFAA-PC se fue rearticulando bajo la conducción de la cúpula militar. Mientras los partidos políticos discutían en libertad los problemas nacionales en el espacio del Parlamento, la política gubernamental apuntalaba la concentración económica, mediante cuotas de rentabilidad, a los sectores amparados en el poder político. La transición hacia la democracia no solamente no modificó las relaciones sociales fundamentales sino que fortaleció la concentración del poder político.

Mientras el liderazgo militar del presidente Rodríguez fue eficaz para garantizar la unidad entre fracciones empresariales -civiles y militares- y la entente PC-FFAA en tomo al proyecto de un stronismo sin Stroessner, el predominio militar fue ocupando espacios de poder en la estructura estatal. Con el tiempo la clase militar habría de convertirse en una fuerza económica prominente, con negocios y espacios territoriales compartidos con otros grupos económicos desarrollados bajo la dictadura. El reparto de los espacios de corrupción y del contrabando, entre los diferentes sectores del bloque dirigente, consolidaron la apropiación privada de los recursos estatales. Por ello el proceso de transición a la democracia no implicó una gradual transferencia de poder a la sociedad civil. Por el contrario, desarrolló la formación de un poder dual, cívico-militar, en el marco de la Constitución Nacional. Este poder se materializó en una precisa forma de funcionamiento estatal: representación política pluralista en la esfera del Parlamento y concentración económica en el bloque político de poder.

A mediados del año 1992, se actualizan las confrontaciones entre las diferentes facciones del PC por el control del aparato político. Las elecciones presidenciales y legislativas de mayo de 1993 se convierten en el objetivo concreto de la lucha dentro del partido del Estado. En la burocracia partidaria estaba claro que quien controla el aparato impone su candidato a presidente. Dos posiciones claves sustentaban la lucha por el poder partidario: a) la autonomía del PC respecto de las Fuerzas Armadas; y b) la unificación del Partido a través de las Fuerzas Armadas. Se impone la idea de aquellos sectores más vinculados con la cúpula militar, la alianza militar-civil. La dirección militar optó por apoyar a Wasmosy como candidato del Partido Colorado. Para la lógica del poder, Wasmosy reunía al menos cuatro importantes cualidades para heredar el poder: figura civil; confiable para el general-presidente Rodríguez; destacado empresario del poderoso grupo económico conocido como "los barones de Itaipú"; y afiliado al Partido Colorado sin trayectoria política en la estructura partidaria. En medio de una profunda crisis interna generada en el mismo proceso electoral, en marzo de 1993 la jerarquía militar impuso -después de un golpe jurídico en la interna partidaria- Wasmosy como candidato. El Tribunal Electoral del PC, máxima autoridad partidaria en

asuntos electorales, proclamó ganadora la lista encabezada por la dupla Wasmosy-Seifart. Esta decisión expresó con total transparencia el peso de la cúpula militar como gran elector, por encima del número de votos alcanzados por los otros sectores.

El 9 de mayo de 1993, en competencia desigual entre el partido del Estado y la oposición política (PLR y Alianza Encuentro Nacional), el candidato de la cúpula militar fue elegido presidente. Uno de los principales operadores políticos de Wasmosy fue el general Oviedo. Triunfó la trilogía Gobierno, Partido Colorado y Fuerzas Armadas.

A partir del ejercicio del gobierno de Wasmosy, comenzaron a evidenciarse las rigideces socio-políticas de un modelo basado en la representación formal de las reglas de la democracia electoral y en la autonomía del poder militar real. Por una parte, para legitimar la idea de la consolidación de la democracia Wasmosy debía impulsar la desmilitarización del poder político. Pero por otra parte, para ejercer el liderazgo del Partido en el gobierno debía cumplir la orden de quienes lo designaron su representante y garantizar así el dominio económico heredado del régimen dictatorial. En este contradictorio marco se ha inscrito lo fundamental de la política de gobierno de Wasmosy. En un contexto de exigencias democráticas -es decir de fortalecimiento del poder civil y de subordinación del poder militar a través de la institucionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas- el presidente ha privilegiado al sector duro de las mismas Fuerzas Armadas.

En el terreno social, la exigencia de la población coincide con la necesidad de encontrar una reactivación económica que solucione los problemas de productividad y marginación. La política económica del gobierno proclama un discurso "moderno" neoliberal, pero defiende en lo fundamental el contenido de la política económica de los gobiernos anteriores. El mantenimiento del esquema presupuestario, donde el 95% del gasto se destina a mantener la burocracia estatal y a gastos de defensa, es uno de los instrumentos políticos que el gobierno ha utilizado para garantizar la unidad PC-FFAA. Otro instrumento es la estabilidad económica a través de la economía negra (contrabando, lavado de dinero, narcotráfico) que le ha permitido al poder ejecutivo contar con una base social y regular las relaciones conflictivas que se producen entre grupos empresariales y el propio gobierno debido a la competencia "desleal" entre grupos diversos, y las tensiones existentes con obreros y campesinos por problemas de desempleo salarios y tierras.

Esta relación contradictoria entre gobierno y sociedad se traduce en un acelerado deterioro de la legitimidad del gobierno. En efecto, se desarrolla un conjunto de luchas sociopolíticas, expresadas en huelgas obreras que paralizan al país, marchas

campesinas en la ciudad de Asunción, ocupaciones de tierras o reclamos de la ciudadanía frente al Parlamento.

Crisis y equilibrio inestable

Podría decirse que en el tercer año de gobierno del Presidente Wasmosy la dualidad de poderes afectó simultáneamente las relaciones políticas y la actividad económica. La exigencia social de transformar el poder dual en una democracia representativa de las mayorías, agudizó las contradicciones del sistema en su conjunto. Más que nunca, se tomó evidente la situación de ingobernabilidad del país. La dificultad de profundizar la democracia revelaba por un lado elementos dirigidos a asegurar la estabilidad política del gobierno civil y por el otro elementos potenciales de una crisis de gobernabilidad.

Desde el punto de vista de la estabilidad podían verificarse cuatro factores: a) la exigencia de la sociedad de fortalecer el poder civil como sustento de la democracia; b) el apoyo a Wasmosy, para que ejerciera un liderazgo civil, de la comunidad internacional y principalmente EEUU y los países del Mercosur; c) el llamado pacto de gobernabilidad entre el gobierno y el PLRA, principal partido de oposición; y d) la alianza política entre Wasmosy y el general Oviedo. Estos factores de estabilidad implicaban, a su vez, potenciales elementos de crisis: la transformación de los mecanismos de poder dual con medidas democráticas es algo cualitativamente diferente a realizar simples ajustes del aparato político heredado del régimen dictatorial.

Entre los principales factores de inestabilidad podemos mencionar:

a) La tendencia a la concentración y monopolio del poder económico sobre la base del aumento de la marginalidad social.

b) La emergencia de una pluralidad de fuerzas sociales, anteriormente desorganizadas por los mecanismos represivos, que alcanzaron cierto nivel organizativo, y plantearon confrontaciones directas con el gobierno: los campesinos, población mayoritaria en el Paraguay, luchan por un pedazo de tierra; los pequeños productores de algodón demandan organizadamente precios justos; la clase trabajadora, a través de la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT), coordinan sus luchas reivindicativas para mejorar salarios, empleos y soluciones negociadas. Asunción se transforma en el centro del descontento social.

c) Dentro del bloque de poder económico, existe una confrontación entre empresarios nucleados en la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Federación de la Industria, la Producción y el Comercio (FEPRINCO) y el gobierno. La raíz del problema se encuentra en la competencia desleal que se establece entre los grupos

económicos vinculados al poder político ("empresarios de frontera" o políticos empresarios) y los grupos empresariales que carecen de protección política. La situación se agudiza más todavía cuando se revelan actos de corrupción en el sistema financiero, negociados escandalosos y apropiaciones privadas de los recursos del Estado que involucran a altos personajes del gobierno. Otros ingredientes que profundizan las diferencias son una errática política económica y la impunidad a los responsables del saqueo.

d) Las tensiones entre la embajada EEUU y el gobierno paraguayo. Washington tiene la certeza de una estrecha vinculación entre narcotraficantes y grupos poderosos del poder político, que pone en estado de riesgo la transición hacia la democracia. Esa percepción se apoya en la falta de medidas eficaces del gobierno para combatir el tráfico de drogas, en especial la cocaína. Las declaraciones de un alto funcionario de la administración Clinton en Asunción resumen el pensamiento de Washington "Es necesario que el gobierno paraguayo deje de ser el mejor amigo de los narcos y que combata la droga para revertir las condiciones de país de tránsito. Las autoridades nacionales saben por dónde pasa la droga en Paraguay".

e) La lucha soterrada entre Wasmosy y Oviedo por el control del poder político. Esta tensión se puso de manifiesto con las designaciones de ministros del poder ejecutivo y funcionarios estatales, ascensos y traslados militares, controles de empresas estatales, negociados, y estructura del poder partidario.

f) La proximidad de las elecciones internas del PC -cinco veces postergadas por el oficialismo- que habrían de redefinir las relaciones entre gobierno y Partido.

La crisis política o el límite del poder dual

Si en mayo de 1993 Lino Oviedo había sido el principal operador político para garantizar el triunfo presidencial de Wasmosy, en abril de 1996, se convirtió en el principal obstáculo para la representación formal del poder civil. Era un hecho evidente que las actividades políticas públicas de Oviedo, violando la Constitución y las leyes que prohíben tenerlas a un oficial en servicio activo, reducían el estrecho margen de legitimidad del primer presidente civil y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El mes de abril también representó un mes clave para el poder gubernamental. El gobierno de Wasmosy se enfrentaba a elecciones internas en el PC -cinco veces postergadas por el oficialismo- en donde el principal oponente del grupo wasmosista, Luis María Árgana -líder de la ortodoxia stronista- aparecía como posible triunfador en ellas. Si en algo Wasmosy y Oviedo coincidían, era en que el triunfo del Árgana tendría un efecto desestructurante en el precario equilibrio del poder político. Conviene recordar que Árgana había sido privado de la anterior

candidatura presidencial por medio del fraude realizado por la alianza Oviedo-Wasmosy. Pero había una diferencia en el interior de esta alianza; Wasmosy ya no podía postergar las elecciones internas mediante argucias legales sin riesgo de debilitar su precaria legitimidad. Oviedo, en cambio, apostaba a evitar las elecciones internas con el objeto de mantener su fuerza en el aparato de Estado y asegurarse una posición de poder dentro del partido a fin de garantizar su candidatura presidencial en las elecciones de 1998.

En este sentido, la eventualidad del triunfo de la ortodoxia stronista ubicaba al gobierno en una situación paradójal. Por una parte el sector wasmosista debía aceptar la realización de las elecciones internas partidarias a riesgo de perder su legitimidad política. Por otra parte, el triunfo del líder stronista se transformaba en un elemento potencial de crisis del poder dual wasmosista-militar. La politicidad de la crisis irrumpiría con toda evidencia. La confrontación entre el comandante del Ejército y el Poder Ejecutivo era inminente. El equilibrio de fuerzas entre el poder civil y el militar ya no se podía regular en la privacidad del Palacio de Gobierno. De este modo, el relevo de Oviedo como jefe del Ejército fue el recurso inmediato del presidente Wasmosy para dirimir sus diferencias políticas y de negocios con aquél. Entonces Oviedo recurre a las armas.

Los sucesos

En este contexto se produce la crisis del 22 de abril. Ese día corren insistentes rumores de que el general Oviedo ha sido relevado por el presidente y que se niega a aceptar la decisión amenazando con un golpe de Estado. Frente a esta coyuntura casi inmediatamente empiezan a esbozarse una solución militar y una salida política negociada.

- a) La solución militar promovida por Oviedo con pleno apoyo del sector duro del Ejército estaba destinada, por una parte, a anular el decreto presidencial, y por la otra, a mantener la "estructura legítima" del poder dual.
- b) La salida política negociada respondía a una iniciativa de Wasmosy con el respaldo de su grupo económico. La propuesta consistía en la renuncia, o permiso temporal, presidencial y su reemplazo por el presidente del Congreso (identificado también con el grupo económico del poder presidencial).

Como se ve, la salida de la crisis se redefine a partir de una clara posición de fuerza. Sin embargo, la solución militar se estaba también condicionada al apoyo que pudiera encontrar en el Congreso nacional y en los partidos opositores. El fantasma del golpe de Estado se barajó como solución de la crisis y el líder militar envió señales de ataques al grupo gobernante. Quizá por eso el presidente

Wasmosy vacilaba en informar sobre la decisión tomada en su carácter de comandante en jefe. Se vive una sensación de vacío de poder.

Ante el silencio del presidente, la embajada estadounidense emite el primer comunicado oficial donde se informa a la opinión pública del pase a retiro del general Lino César Oviedo. Decía el informe de la Embajada. La información que allí se brinda, antes que el mismo gobierno, tiene el mérito de plantear en términos concretos y reales la solución a la crisis política-militar: la salida de Oviedo sin condiciones. El informe contiene dos elementos que son claves para entender el enfoque estratégico del gobierno de EEUU en la crisis: a) el general Oviedo debe dimitir, tal como se le ordenara; y b) EEUU apoya al presidente Wasmosy y a su gobierno. En el fondo lo que plantea la propuesta es la redefinición del poder civil y de las Fuerzas Armadas: este replanteo del poder dual implica el desplazamiento del poder militar. Aquí radica la diferencia estratégica de EEUU y del polo de poder civil. Horas después de este comunicado, Wasmosy ratificó la posición de la embajada. En su mensaje anunció el relevo y reemplazo de Oviedo, amenazando también con el de sus oficiales adeptos. Pero la situación se tornó más complicada en la medida en que Wasmosy se mostraba débil para asumir el liderazgo de la situación política. Grupos influyentes de su entorno se inclinaban por aceptar las exigencias del Oviedo. Al parecer el viejo sueño del golpe de Estado como vía de acceso al gobierno sigue alimentando las fantasías de empresarios y grupos políticos.

En ausencia de una firme conducción política, el embajador de EEUU apareció en la escena pública coordinando la representación de la comunidad internacional. En la estrategia de contener las ambiciones del golpismo los representantes diplomáticos de Brasil y Argentina articularon esfuerzos para garantizar la seguridad democrática del Mercosur. Toda la comunidad internacional se movilizó para defender la democracia y apuntalar el liderazgo del presidente Wasmosy, en un acto sin precedentes en la historia paraguaya. Desde el presidente Clinton hasta el secretario General de la OEA César Gavina, que viajó hasta Asunción, se expresó el apoyo directo a la decisión tomada por Wasmosy. En el terreno de la confrontación, es un hecho evidente que la intervención de la comunidad internacional produjo un cambio sustancial en la correlación de fuerzas entre los poderes civil y militar. La relación se confrontaba ahora entre el aparato militar controlado por Oviedo y la alianza internacional coordinada por EEUU. El día 24, una declaración de la Casa Blanca ratificaba su apoyo al proceso democrático. Así la propuesta de la embajada, la salida de Oviedo sin condiciones, gradualmente empieza a imponerse. La superioridad estratégica no residía ya en la fuerza militar, sino en la comunidad internacional y en el bloque regional. Hasta el general Oviedo pareció comprender la nueva situación y finalmente hizo entrega de la

Comandancia del Ejército. En la soledad de la derrota realizó un último esfuerzo por conservar el control del poder dual. Wasmosy respondió ofreciéndole a su viejo aliado el Ministerio de Defensa. Ante esto, la juventud estudiantil expresó públicamente la indignación ciudadana frente al Palacio de Gobierno. La irrupción de la gente en la esfera de gobierno puso en el centro de la crisis la cuestión de la participación política y la democracia. Quizás Wasmosy comprendió el valor de ésta por primera vez, entendida como poder ciudadano. Poco después, en la soledad del poder el presidente recapacitaba y decidía "sacrificar su compromiso personal y no designar al general Oviedo ministro de Defensa". La crisis militar concluía.

Asunción, junio de 1996